

ACCIÓN URGENTE

PROTEGER A MINIFUNDISTAS FRENTE A LA VIOLENCIA

Pistoleros a sueldo han disparado contra dos comunidades de trabajadores rurales en el estado de Tocantins, en el norte de Brasil. Cinco dirigentes comunitarios han sido “señalados para morir”. La zona es escenario de una larga disputa por la tierra entre hacendados locales y minifundistas, que luchan por la reforma agraria.

Unas 40 familias de los asentamientos de Assentamento Santo Antônio Bom Sossego y Acampamento Vitória, en el municipio de Palmeirante, están recibiendo reiteradas amenazas de ocho pistoleros a sueldo de un hacendado local. La noche del 6 de junio, los pistoleros dispararon contra el campamento. El 4 de junio, se oyó a los pistoleros discutir sobre si llevaban a cabo una ejecución. El 29 de mayo, uno de ellos dijo a un residente: “aquí va a morir gente (*“lá vai morrer gente”*). Los trabajadores rurales también han denunciado que hombres con antorchas caminan alrededor del perímetro de sus asentamientos. Al parecer, cinco miembros de la comunidad aparecen en una lista de personas que son objetivo de los pistoleros.

Las amenazas han sido constantes desde el pasado mes de octubre. El 3 de octubre, los pistoleros quemaron varias chozas del Assentamento Santo Antônio Bom Sossego. El 16 de octubre, Gabriel Vicente, trabajador rural, fue muerto a tiros. Quienes trabajan para la oficina regional de la Comisión Pastoral de la Tierra (*Comissão Pastoral da Terra, CPT*), ONG nacional que trabaja sobre cuestiones de tierras, han recibido una serie de amenazas de muerte por su apoyo a estas comunidades.

El Assentamento Santo Antônio Bom Sossego fue creado en 2003 por el órgano federal responsable de la reforma agraria, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (*Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA*); un grupo de trabajadores sin tierra estableció el campamento Vitória en sus cercanías. En 2005, los hacendados reclamaron la propiedad de la tierra de la zona y empezaron a acosar a estas comunidades. El año pasado, madereros ilegales se instalaron en la región.

Pese a que se ha presentado una serie de denuncias, la policía no ha llevado a cabo investigaciones adecuadas sobre las amenazas. En una reunión la que participaron fiscales federales, el INCRA, la CPT y miembros de las comunidades, se acordó que se pediría a los hacendados que abandonaran la zona y que otras diez familias de minifundistas se reasentarían allí, pero estas medidas no se han puesto en práctica.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en portugués, en inglés o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de las 40 familias del Assentamento Santo Antônio Bom Sossego y el Acampamento Vitória, en el municipio de Palmeirante, que están sufriendo amenazas constantes;
- pidiendo a las autoridades que investiguen todos los actos de violencia e intimidación contra estas comunidades y lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiéndoles que completen el proceso de reforma agraria en la región para dar seguridad a largo plazo a estas comunidades.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2011, A:

Secretario de Seguridad Pública del estado de Tocantins

Exmo. Sr. Secretário de Estado

João Costa Ribeiro Filho

Palácio Araguaia - Pç. dos Girassóis,

s/nº Marco Central

77.001-900 - Palmas/TO, Brasil

Fax: +5563 3218 6800

Tratamiento: Vossa Excelência/

Your Excellency/Excelencia

Secretaria Federal de Derechos Humanos

Exma. Sra. Ministra Maria do Rosário

Setor Comercial Sul - B, Quadra 9, Lote C,

Edifício Parque Cidade Corporate, Torre "A",

10º andar,

Brasília, Distrito Federal, Brasil

CEP: 70308-200

Fax: +5561 2025 9414

Tratamiento: Vossa Excelência/

Your Excellency/Excelencia

Y copia a:

Comisión Pastoral de la Tierra - Tocantins

Comissão Pastoral da Terra - Tocantins Rua

Porto Alegre, 446,

Bairro São João, caixa postal: 50 - CEP:

77.807-070 - Araguaína-to, Brasil

Fax: +5562 4008 6405

Envíen también copia a la representación diplomática de Brasil acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

**AMNISTÍA
INTERNACIONAL**



ACCIÓN URGENTE

PROTEGER A MINIFUNDISTAS FRENTE A LA VIOLENCIA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Según la Comisión Pastoral de la Tierra (*Comissão Pastoral da Terra*, CPT), las disputas por la tierra han causado más de un millar de asesinatos desde la década de 1970. Muy pocos de estos casos se han enjuiciado con éxito. Se cree que varios cientos de activistas rurales corren grave peligro por su trabajo.

Las zonas fronterizas en las que actúan madereros ilegales y rancheros en el norte del país, incluido el estado de Tocantins, tienen un historial de conflicto rural y violencia. La falta de presencia efectiva de las autoridades estatales en esta zona, y la falta de voluntad política de intervenir, han permitido a las élites rurales usar la fuerza impunemente contra los activistas agrarios y medioambientales.

La impunidad sigue siendo un obstáculo fundamental. Según la CPT, más de 1.500 personas han sido asesinadas en actos de violencia rural desde 1985, pero menos de un centenar de personas han sido condenadas por ello. Y sólo una persona que ordenó un asesinato se encuentra entre rejas: Vitalmiro Bastos de Moura, por ordenar el asesinato de una monja, la hermana Dorothy. Más de 1.800 activistas rurales han recibido amenazas de muerte a lo largo de la última década; de ellos, 42 han sido asesinados, y otros 30 han sufrido intentos de asesinato.

A lo largo del mes pasado, varias personas murieron en ataques que parecían ir dirigidos contra activistas sociales y de derechos humanos en el vecino estado de Pará y en el estado de Rondônia.

El conservacionista José Cláudio Ribeiro da Silva y su esposa Maria do Espírito Santo sufrieron una emboscada y fueron asesinados a tiros cerca de su casa en Nova Ipixuna, Pará, el 24 de mayo. Durante años, habían luchado contra la deforestación de la selva tropical provocada por la explotación maderera y otros negocios. Un hombre que, según se creía, había presenciado su asesinato, Erenildo Silveira dos Santos, fue asesinado cuatro días después.

Adelino Ramos, reformista agrario, murió el 27 de mayo tras recibir seis disparos cuando se dirigía a un mercado con su esposa y sus hijos. Llevaba mucho tiempo protestando por las actividades de los madereros ilegales en Rondônia.

Estos últimos homicidios se produjeron al tiempo que el Congreso de Brasil aprobaba la reforma de las leyes de protección medioambiental brasileñas, una reforma que muchos consideraron que debilitaba las protecciones actuales y ponía a los activistas rurales en un mayor peligro de sufrir violencia.

AU: 168/11 Índice: AMR 19/009/2011 Fecha de emisión: 7 de junio de 2011

